



Revista IUSTA

ISSN: 1900-0448

revistaiusta@usantotomas.edu.co

Universidad Santo Tomás

Colombia

ECHEVERRI URUBURU, ÁLVARO
ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Revista IUSTA, vol. 1, núm. 26, enero-junio, 2007, pp. 136-151
Universidad Santo Tomás
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560358684008>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Conferencias Internacionales

ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA*

Origin and development of violence in Colombia

ÁLVARO ECHEVERRI URUBURU**

Fecha de presentación: 6 de marzo de 2007

Fecha de aprobación: 11 de mayo de 2007

Resumen

Desde una perspectiva histórica se describe la evolución del conflicto armado en Colombia. El texto inicia su análisis con las guerras civiles presentadas en la primera mitad del siglo XIX, hasta el actual fenómeno de violencia que se origina en la década de los sesenta. Se describe como en Colombia la guerra interna ha transcurrido por diversos escenarios, actores e intereses.

* En el Marco de la Escuela de Verano (Julio 006) sobre el tema "La sociología jurídica al servicio de los Derechos Humanos en los procesos de paz", organizado por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (País Vasco- España).

** Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Magíster en análisis político, desarrollo económico y relaciones internacionales..

Palabras clave

Conflicto armado, violencia y grupos armados.

Abstract

The text describes, from a historical perspective, the evolution of the armed conflict in Colombia. The analysis starts with the civil wars of the first half of the 19th century and ends with the phenomenon of violence emerged in the decade of 1960. There's a description of how the Colombian internal war passed through different scenarios and has been characterised by different actors and interests.

Key words

Armed conflict, armed groups.

INTRODUCCIÓN

Colombia soporta, particularmente a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la más grave crisis de carácter humanitario de todo el hemisferio occidental. Las estadísticas la muestran como el país con el más alto índice de homicidios del mundo por cada 100 mil habitantes (78.2 seguida de lejos por Jamaica con el 27.7 y Rusia con el 20.2)¹; el segundo con el mayor número de población desplazada –cerca de 3 mil millones de personas– como consecuencia del escalamiento del conflicto interno durante los últimos quince años; posee el mayor número de secuestrados al año –cerca de 3.700²– y es el tercero, a nivel mundial, en tener sembrado su territorio de minas antipersonas, que anualmente causan la muerte o la mutilación a cientos de

inocentes, particularmente campesinos y menores de edad.

Posiblemente por debajo de los índices masivos de brutalidad provocados por la confrontación entre *utus* y *tutsis* en Ruanda y que conmovieron a la opinión internacional hace pocos años, Colombia ha padecido desde la década mencionada, numerosas masacres de campesinos e indígenas perpetradas por grupos guerrilleros y paramilitares, cuya característica ha sido la extrema sevicia que ha acompañado a tales matanzas y que inevitablemente traen a la memoria colectiva el recuerdo de la barbarie que caracterizó a los autores de asesinatos masivos cometidos durante el período conocido en la historia política reciente de nuestro país como “la violencia” (1948-1962)³.

1 Naciones Unidas, Centre for international crime prevention, “Global Report on crime and justice” (1999).

2 Esta cifra, según estadísticas del actual gobierno, puede haberse reducido a la mitad.

3 En la obra “La violencia en Colombia” (1968), de Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, sin duda el más importante estudio sociológico de la violencia colombiana durante la década de los cincuenta del siglo pasado y que marca el nacimiento de la sociología científica en nuestro país, se reseñan algunos de los “métodos” inhumanos y que denunciaban el extremado sadismo empleado por los responsables de las matanzas durante ese período, no sólo para eliminar a los presuntos “enemigos” sino para ultrajar, hasta el paroxismo criminal, sus restos y despojos.

No obstante la gravedad de esta situación, resulta paradójico su relativo desconocimiento en los medios académicos extranjeros y la pasividad de la comunidad internacional para contribuir a su resolución.

Por tal motivo, como colombiano y académico comprometido con la suerte de nuestro país, no podemos menos que agradecer al Instituto de Sociología Jurídica de Oñati, el haber programado en esta Escuela de Verano, un espacio para reflexionar sobre la violencia colombiana y explorar, desde esa disciplina, posibles caminos de salida a la crisis humanitaria que ella ha provocado.

La presente ponencia pretende, por tanto, historiar los períodos de la violencia reciente en Colombia para ubicar someramente a los participantes en esta Escuela en dicho fenómeno, dejando a otros docentes de nuestro país, la tarea de analizar los distintos intentos pacificadores vividos durante estos años así como el proceso de reinserción que actualmente se cumple con los grupos paramilitares o de autodefensa por iniciativa del actual gobierno.

1. Etapas de la violencia colombiana

Dado el carácter multiforme de la violencia que ha padecido y padece la sociedad colombiana con respecto a actores, comportamientos y contextos, la violencia a la cual nos referimos en esta ponencia es la violencia estrictamente política.

Este último tipo de violencia ha sido un fenómeno constante de la historia del país, particularmente desde su constitución como Estado independiente en 1810.

Podemos distinguir, por tanto, tres etapas de la violencia política colombiana, teniendo en cuenta sus elementos principales: el contexto general de cada una de ellas; el carácter de sus prota-

gonistas y sus correspondientes motivaciones y objetivos:

- a) Etapa de las guerras civiles del siglo XIX.
- b) Etapa de la llamada “Violencia” de mediados del siglo XX.
- c) Etapa contemporánea de la violencia.

Las guerras civiles del siglo XIX. Las siete guerras de carácter nacional y 59 guerras e insurrecciones armadas entre los Estados federales y dentro de estos durante ese siglo, fueron el resultado de las fuertes confrontaciones entre las elites políticas de la época en torno a definiciones estatales generales: relaciones Iglesia-Estado, concesión de la libertad a los esclavos negros, régimen de organización territorial federalista o centralista.

Como es apenas obvio, las frecuentes confrontaciones armadas hicieron difícil y extremadamente lento el desarrollo del país. Cuando Colombia inicia el siglo XX, es un país destrozado y a punto de su desintegración como consecuencia de la última y más sangrienta de todas sus guerras civiles, la de los mil días” (1899-1903) que deja más de cien mil muertos, dentro de una población total que apenas si llegaba a los tres millones de habitantes.

Pero, los comienzos del siglo XX tampoco trajeron la paz. La represión oficial contra las primeras manifestaciones de organización sindical en la década de los veinte (ferrocarriles, puertos y “enclaves” de producción en manos extranjeras como el banano y el petróleo), culminan con la “masacre de las bananeras” en 1928, que victimiza al movimiento reindutivo de los trabajadores bananeros en contra de la empresa norteamericana que explotaba la fruta mediante concesión del Estado, la United Fruit Company. El número de obreros asesinados ese año por las tropas del gobierno en la plaza del municipio de

Ciénaga (departamento del Magdalena) es un dato que nunca se sabrá con exactitud, tal como lo simboliza con trágica belleza nuestro premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, en su más célebre novela *Cien años de soledad*, mediante la figura de la aquel tren infinito, cargado con los muertos de la matanza, que se pierde en la oscuridad de la noche.

La violencia de la década de los Cincuenta. El retorno al poder del partido Liberal en 1930, después de 45 años de exclusión a través de métodos violentos (expulsión del país de sus principales dirigentes, censura de prensa y la guerra civil de “los mil días”), lo mismo que de procedimientos seudolegales (un sistema electoral fraudulento), provoca los primeros brotes de violencia entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador (matanzas de campesinos en el departamento de Santander) que alcanzará su clímax sangriento en la década de los cincuenta.

El período conocido en nuestra historia reciente como “la violencia” (1948-1960), sigue siendo un referente obligado para entender la violencia contemporánea, no sólo porque ésta última hunde muchas de sus raíces explicativas en ese período –vg; las primeras zonas de implantación de ésta corresponden a aquellas que vivieron más intensamente el período de la violencia de los años cincuenta. Igualmente, uno de los protagonistas decisivos de la actual violencia, el movimiento guerrillero de las Farc surgió durante ese período- sino también por los métodos de acción violenta empleados por sus agentes actuales, tanto la de los grupos guerrilleros como los de las fuerzas paramilitares, narcotraficantes y agentes gubernamentales.

La “Violencia” de mediados del siglo pasado ha sido presentada por sus protagonistas principales (los partidos tradicionales) y algún sector de la historiográfica nacional, ligada a la ideología del Frente Nacional⁴, como una suerte de “fatalidad telúrica” que anegó al país en un turbión de sangre, sin autores ni responsables conocidos de su génesis y desarrollo (Pecault, 1987).

Por el contrario, la abundante bibliografía sobre este período de nuestra historia, tiende a demostrar que los hechos violentos que lo caracterizaron tuvieron su origen en un proyecto político reaccionario, de tintes inocultablemente fascistas, de un sector del partido conservador –el “laureanismo”, por el nombre del jefe de esta fracción, Laureano Gómez- que pretendió exterminar físicamente al partido liberal, visualizado entonces como el “caballo de Troya” del comunismo a raíz de las reformas sociales que dicho partido había promovido durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) como la consagración constitucional de los derechos laborales de asociación, negociación y huelga; la función social de la propiedad- a cuyo amparo trató de revolverse el viejo problema de la concentración la propiedad agraria lo mismo que el de la separación entre la Iglesia y el Estado, con su secuela de libertad de cultos y de enseñanza por medio de un nuevo concordato suscrito con la santa Sede, que puso término al concordato anterior de 1887 que había sancionado el monopolio de la enseñanza y la orientación ideológica de ésta en cabeza de las jerarquías de la Iglesia Católica; la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; la creación de la Universidad Nacional como centro de educación pública para la formación profesional de los sectores más po-

4 El Frente Nacional (1958-1974), fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador, elevado a normatividad constitucional por medio de un referendo popular (1957), de acuerdo al cual, ambos partidos se repartían paritariamente todos los cargos públicos en las tres ramas del poder y se alternaban en la presidencia por espacio de doce años. Dicho pacto puso fin al período de la “violencia”, durante el cual se habían enfrentado en una “guerra civil no declarada”. La necesidad de la recuperación de la paz, según los dirigentes políticos de la época, condujo a tender un “manto de olvido” sobre los hechos del reciente pasado, sobre sus protagonistas y responsables.

bres; la reforma tributaria que estableció el impuesto de renta progresivo de acuerdo a la riqueza de los contribuyentes, entre otras varias reformas.

Estas, orientadas a la modernización del país, encolerizaron a la oposición conservadora, a la iglesia e incluso a sectores liberales ligados a las élites tradicionales. Dirigentes del partido conservador anunciaron entonces el “inicio de una contrarrevolución de masas”⁵ para oponerla a “la revolución en marcha”, proclamada por el gobierno del presidente López. Laureano Gómez hace entonces la apología sin ambages del atentado personal. El lenguaje de la confrontación contribuye al enrarecimiento de la atmósfera política y prepara el desencadenamiento de las acciones violentas.

Cuando López decreta la “pausa” en el proceso de reformas, el liderazgo de estas pasa a la fracción más radical del liberalismo, acaudillada por Jorge Eliécer Gaitán. El partido liberal se divide y pierde el poder frente al Conservatismo en 1946. Gaitán, convertido en jefe único de ese partido y contando con las mayorías electorales que le favorecen, se muestra como el próximo presidente indiscutible de la Nación. Se suceden entonces una serie de matanzas e incendios de poblaciones de filiación liberal, dirigidas por gamonales conservadores en asocio con las policías locales, adictas al régimen y conformadas por individuos procedentes de regiones caracterizadas por su sectarismo político a favor del partido de gobierno.

Estos trágicos acontecimientos, llevan al caudillo popular a reclamar del presidente conservador Mariano Ospina Pérez el respeto a las garantías constitucionales básicas:

Como vocero del pueblo sumido en la angustia por la violencia del régimen, Gaitán pronunció en 1947 uno de sus discursos memorables a favor de la convivencia y del respeto a los derechos ciudadanos, que desde entonces se conoce como “oración de la paz.

Pero fue “la manifestación del silencio” (febrero 7 de 1948) la que conmovió de manera más honda la conciencia de los colombianos. En ella, cerca de cien mil habitantes de una ciudad, [Bogotá] que escasamente llegaba a 300 mil, desfilaron silenciosamente hacia la plaza de Bolívar agitando un mar de pañuelos blancos. Gaitán habló entonces como único orador, ante una multitud que lo oyó en absoluto silencio. Su discurso no duró más de doce minutos”...días más tarde ante una nueva masacre... “pronunció en Manizales (febrero 15 de 1948) su oración por los humildes...(Contreras, 2002, p. 119) Dos meses después (9 de abril de 1948) Gaitán caía asesinado en una céntrica calle de Bogotá. Su muerte, atribuida por el Gobierno conservador a una “conjura del comunismo internacional”, en el momento en que se reunía en Bogotá la conferencia Panamericana que daría origen a la organización de Estados americanos –OEA-, produjo un verdadero levantamiento popular en la ciudad, que sin dirección política, terminó anarquizando dando lugar a saqueos e incendios de comercios, residencias y edificios públicos que destruyeron al centro de la ciudad, así como de varios intentos fallidos de toma del palacio presidencial. La revuelta sólo pudo ser controlada completamente dos días más tarde con la llegada de un fuerte contingente del ejército traído desde la vecina ciudad de Tunja a cien kilómetros de Bogotá. En otros lugares del país igualmente se vivieron actos de insurrección popular mediante la conformación de “juntas revolucionarias” que desplazaron a las autoridades locales y que asu-

5 Expresiones del dirigente conservador Silvio Villegas.

mieron el poder “a nombre del pueblo liberal”. Todos estos levantamientos son develados sangrientamente por el ejército. Había comenzado el periodo de la “violencia” y Colombia nunca volvería a ser la misma.

Los hechos que profundizan la crisis política se suceden vertiginosamente durante los dos años siguientes. Después de un corto periodo de cohabitación con el gobierno conservador por parte de algunos miembros de la dirigencia liberal “moderada” –que se había apartado del reformismo de López Pumarejo y enemigos declarados del líder asesinado–, el partido liberal retorna a la oposición cuando las matanzas de militantes liberales continúan en todo el país. El presidente Opina Pérez cierra el Congreso de la República y disuelve las asambleas departamentales, cuando aquél órgano, dominado por el liberalismo, intenta en su contra un juicio político. El gobierno conservador decreta al mismo tiempo el Estado de Sitio en todo el país, el cual permanecerá en vigor durante los diez años siguientes, constituyéndose en el instrumento prácticamente único para el ejercicio del poder, ante la desaparición del órgano legislativo durante todo ese periodo.

Cuando Vicente Echandía, hermano del candidato a la presidencia por el liberalismo, el jurista Darío Echandía, es asesinado por la fuerza pública durante una manifestación en Bogotá, el partido se retira de la contienda electoral para elegir al próximo presidente de la República, alegando falta total de garantías y convocando a su militancia a la abstención.

En estas condiciones, resulta elegido como presidente el que para muchos había sido el incitador de la violencia, Laureano Gómez, con los sólo votos de su partido, el conservador, electoralmente minoritario.

El ascenso de Gómez a la presidencia (1950), marca un recrudecimiento de los hechos violentos,

estimulados por el discurso del presidente que habla de “depurar el censo electoral... eliminando el millón de cédulas falsas que lo conforman”, en clara alusión a las mayorías liberales.

El campesinado de filiación liberal, para entonces sometido al papel de víctima, pasa a la posición de resistencia armada. Surgen, a finales de 1949 y comienzos del 50, guerrillas campesinas, con el tibio apoyo de los dirigentes liberales de las ciudades, en las zonas de más fuerte tradición de ese partido (centro y sur del departamento del Tolima, los llanos orientales, el departamento de Santander, sur de Antioquia y la región cafetera). Por su parte, el partido comunista, víctima igualmente de la violencia oficial, llama a la “constitución de grupos de autodefensa campesina” en las regiones sometidas a su influencia desde la década de los treinta, donde había encabezado la lucha por la tierra contra el poder de los latifundistas (sur del Tolima, regiones de Sumapaz, Viotá y Yacopí en el departamento de Cundinamarca).

Al tiempo que la violencia, en el campo adquiere un nuevo cariz con la irrupción de las guerrillas campesinas que rápidamente pasan a la ofensiva con ataques frecuentes a las fuerzas oficiales, la violencia urbana alcanza a la élite liberal –conformada en su mayoría por empresarios, miembros de los gremios de la producción y el comercio y prestigiosos abogados–. Las residencias del expresidente López Pumarejo y del destacado dirigente de la dirección liberal, Carlos Lleras Restrepo, son incendiadas, lo mismo que los diarios que siguen las orientaciones de ese partido, *El Tiempo* y *El Espectador*, por masas conservadoras fanatizadas y dirigidas por miembros de los cuerpos secretos del régimen. Ante la gravedad de los acontecimientos, los más destacados dirigentes del liberalismo se ven obligados a tomar el camino del exilio.

La violencia de mediados del siglo pasado, cuyos hechos puntuales estamos reseñando:

Tuvo rasgos comunes con las guerras civiles del siglo XIX, a su vez que diferencias profundas: Se asemeja a ellas en cuanto a que la orientación ideológica la ejercían sectores de las clases dirigentes, por conducto de los partidos. Sin embargo, un elemento diferenciador le imprime a la etapa de la violencia un carácter ambivalente. La guerra misma, su conducción militar, la adelantan integrantes de los sectores populares, salidos fundamentalmente del campesinado. Este desfase entre dirección ideológica y conducción militar, explica en buena medida, por una parte sus expresiones anárquicas; por otra, su poder destabilizador y sus efectos sobre el conjunto de la sociedad⁶.

Este ejercicio comparativo requiere una aclaración: los rebeldes que conformaban las guerrillas liberales –e incluso los comunistas- de los años cincuenta, “operaban mayoritariamente dentro de una perspectiva de incorporación al poder” : se trataba de lograr que el partido liberal volviese a ser una de las fuerzas determinantes de los procesos políticos, en contra de las políticas de exclusión e incluso de destrucción física promovidas por el partido conservador -o por lo menos de una de sus fracciones-.

“Carecían, por tanto, de horizonte propio. El horizonte era el que le imponían sus jefes, que no era otro, que el de la posibilidad, para estos, de “recuperar el poder”, o al menos, “entrar a compartirlo”, tal como ya para ese momento lo comienzan a plantear algunos dirigentes liberales, como López Pumarejo, alarmados, por la generalización de la violencia a casi todo el país y el cambio en la orientación ideológica que manifestaban algunos sectores guerrilleros.

Este cambio en la orientación ideológica del movimiento guerrillero campesino, se produce cuando algunos de los grupos armados que lo conforman entran en un proceso de autonomización e incluso de confrontación con la dirigencia liberal, planteando reivindicaciones sociales que responden a los intereses del campesinado, como el de una reforma agraria que redistribuyese la tierra a favor del campesinado pobre⁷.

El mismo López Pumarejo, había avizorado el peligro para el establecimiento tradicional por el curso que iba tomando el proceso de la violencia, cuando, al comienzo de ésta, había pronosticado que detrás de la violencia política “vendría la revolución social”.

“El derrumbe parcial del Estado” (O’Quist, 1978) como ha caracterizado el período el investigador, Paul O’quist (1978), y los peligros de la autonomización del movimiento guerrillero campesino, conduce a los sectores más lúcidos del partido conservador a buscar el arbitraje militar. El segundo golpe de Estado de esta naturaleza que se produce en toda la historia de Colombia en 1953, coloca al frente de la jefatura del Estado al comandante del ejército, el General Gustavo Rojas Pinilla, con el apoyo de la fracción ospinista del conservatismo, que había estimulado el pronunciamiento y que cuenta con el respaldo casi inmediato del liberalismo, que por boca de uno de sus más destacados voceros, Darío Echandía, lo califica como verdadero “golpe de opinión”.

Habiéndose desembarazado del presidente Gómez, cuya intransigencia para buscar cualquier

6 Comisión de estudios sobre la violencia. “Colombia Violencia y Democracia”. Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Universidad Nacional, 1987, p.34

7 Para ilustrar la caracterización de la autonomización de las guerrillas campesinas frente a las élites urbanas, se puede consultar: Guzmán Campos y otros, op.cit 71 y ss.; Torres, Restrepo Camilo, “La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas”, en memorias del 1er Congreso de sociología. Bogotá: Asociación Colombiana de Sociología, 1963. p. 137 y ss.; Guillén Martínez Fernando, “El poder político en Colombia”. Ed. Punta de Lanza, Bogotá, 1979, p. 530 y ss..

tipo de avenimiento con el adversario liberal había conducido al país a un punto de virtual disolución, las elites dominantes apoyándose en el gobierno de Rojas, buscan recomponer la escena política de forma favorable a sus intereses. Bajo el lema de “no más sangre, no más deprecaciones...” Rojas decreta una amnistía general a favor de todos los perseguidos políticos y de los grupos campesinos armados. Durante los meses siguientes al golpe, se produce la desmovilización y entrega de armas de la mayoría de esos grupos, confiados en las promesas de paz ofrecidas por el gobierno militar. Por su parte, los jefes liberales exiliados comienzan a retornar al país.

Con todo, la pacificación completa no se logrará sino con la instauración del llamado régimen del Frente Nacional en 1957, que puso fin a la confrontación entre los dos partidos tradicionales, mediante un pacto entre ambos –elevado a mandato constitucional a través de un referendo popular– que les entrega conjuntamente la mitad de los cargos públicos en las tres ramas del poder por espacio de 12 años.

En 1959, el congreso elegido entonces después de diez años de haber sido clausurado, refuerza el pacto bipartidista, consagrando la institución de la “alternación presidencial”, mediante la cual liberales y conservadores se suceden en la presidencia de la República de forma alternada durante los doce años previstos para la vigencia del pacto constitucional.

En estas condiciones, el proceso de la violencia de la década de los cincuenta, que pareció en determinado momento salirse del cauce querido por los dirigentes de los partidos contendientes, es reconducido de manera favorable y dentro de los marcos tolerables a esos sectores, mediante la reintegración del partido liberal a los procesos políticos normales de la democra-

cía (elecciones, ejercicio del gobierno, participación en la administración pública y en la judicatura, etc.). A cambio de ello, -y esto, nos parece hoy el efecto más perverso del pacto- dicho partido debió renunciar al reformismo social que lo había caracterizado durante las décadas anteriores.

1.1 La violencia contemporánea

1.1.1 Los actores de la violencia actual

1.1.1.1 *Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)*

Daniel Pecaú ha señalado cómo la violencia actual colombiana se sitúa en tres temporalidades, diferentes y combinadas: la antigua violencia o “temporalidad de la violencia tradicional”; la violencia moderna, mezcla de exclusión social e integración a la modernidad- caracterizada por el ingreso del país a una sociedad de consumo que derriba antiguas barreras sociales- y la incidencia de la globalización- particularmente por razón de la demanda de drogas ilícitas desde los países metropolitanos- o temporalidad de la violencia postmoderna (Pecaú, 2005, p. 51).

Como lo ha señalado el investigador del Cinep, Fernán González, las Farc, el agente más poderoso de la violencia colombiana actual, es un buen ejemplo de síntesis de esas tres temporalidades y lógicas destacadas por Pecaú. Por un lado, combina la antigua violencia expresada en su extracción campesina, su discurso telúrico y su insistencia en el problema agrario, con la violencia moderna gracias a su implantación en las regiones de expansión reciente de la frontera agrícola y de enclaves de producción extranjera de minería e hidrocarburos; y con la violencia postmoderna que inserta a ese grupo armado en la globalización “a través de las funciones de regulación y control social y político en gran parte de las regiones de cultivo y produc-

ción de coca y amapola" (p. 52), cuya demanda depende precisamente de los grandes centros de consumo de los países industrializados.

En este sentido, parece útil efectuar una periodización de la historia de las Farc, siguiendo en este punto a autores que, como Fernán González (2003) y Eduardo Pizarro (1998, 1991), se han ocupado rigurosamente del tema:

a) La guerrilla "partisana" (Apud González) de 1966-1977:

Después de la desmovilización de las guerrillas liberales, gracias a la amnistía decretada por el Gobierno de Rojas Pinilla, en 1957, los grupos de "autodefensa campesina" creados por el partido Comunista en el sur del Tolima y en el Centro de Cundinamarca, se niegan a desmovilizarse pero permanecen relativamente inactivos, hasta que en 1966, el segundo gobierno del Frente Nacional, encabezado por el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), inicia un operativo militar en gran escala con el apoyo de la misión americana, denominado "el Plan Lazo", en contra esos reducidos guerrilleros que son publicitados por los sectores de la derecha "laureanista" como "repúblicas independientes". La campaña militar comporta un estruendoso fracaso, pues no logra la destrucción de las pequeñas fuerzas guerrilleras, que se desplazan intactas hacia el sur del país, donde se venía cumpliendo un proceso de ocupación de tierras baldías o abandonadas por sus propietarios por parte de colonos que habían huido de la violencia del período anterior.

El ataque militar tuvo pues el efecto de convertir a unos grupos armados regionalmente estáticos, en verdadera guerrilla móvil que asume la defensa de las reivindicaciones de la reciente colonización, que amplía la frontera agrícola, en contra de los intentos de desalojo por parte de los grandes propietarios ausentistas de los centros urbanos. Por ello, Alfredo Molano (1987), ha caracterizado el proceso como de "colonización armada".

"Con el nombre de FARC aparecen en 1966, tras el ataque militar a las denominadas repúblicas independientes. Sin embargo, hay un gran vacío sobre los cambios políticos, militares y de composición social durante los últimos años, como sostiene William Ramírez Tobón: »Y es que las Farc no son sólo las armas defensivas de la etapa inicial de la colonización armada, o de las ofensivas de la siguiente fase de movilidad guerrillera, o las desestabilizadoras y terroristas del momento actual. Las Farc son también las trochas abiertas en una descomunal empresa de movilización social a través de las cuales transitaban poblaciones enteras en un forzado proyecto de civilización alternativa de grandes sectores de nuestra geografía nacional». Por eso –recalca González– es necesario indagar sobre las diferentes etapas de las Farc y las condiciones que permitieron que el grupo armado pasara de una guerrilla asentada en los aislados e inhóspitos parajes semiselváticos del polígono sureste del Tolima-Huila y se convirtiera por medio de la colonización armada, en un verdadero paraestado, potenciado por el manejo y control social de las economías cocaleras" (González, 2005, p. 53. Cfr. Ramírez, Tobón. Prológo al libro de A. Molano, 1994)

Durante esta fase, las Farc se mueven entre los territorios de sus orígenes (El Cañón del Duda, el Pato, Guayabero, Marquetalia, Yacopí, el Sumapaz) y los nuevos territorios de colonización bajo su influencia (el Ariari, el Cagúan, Guaviare) y en menor medida en otras zonas como el Magdalena medio y el Urabá Antioqueño.

Su accionar se caracteriza por emboscadas a la fuerza pública y asaltos a poblaciones aisladas.

b) Primera expansión de 1977-1983

Para 1977, las FARC creen llegado el momento de pasar de una guerrilla, defensiva a una guerrilla ofensiva, dotada de un plan de acción y de crecimiento, e imbuida en la creencia de que el país había entrado en una etapa prerrevolucionaria. A esta

creencia contribuyen los hechos a que da origen el “Paro Cívico” de 1977, organizado por las cuatro centrales obreras existentes entonces en el país en contra de las políticas económicas del gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), que desencadena auténticos actos de insurrección popular, aunque anárquicos, en varias ciudades y reprimidas por la fuerza pública con un saldo de numerosos muertos y heridos en todo el país.

“La VII conferencia de la organización guerrillera, realizada en 1982, fue explícita en definir la nueva etapa de las Farc: se trataba de “buscar al enemigo y coparlo”, lo que significaba pasar de la actitud defensiva a la ofensiva. Lo anterior se expresaba en metas de crecimiento de los frentes y lo que sería crucial en adelante: un nuevo tipo de finanzas”(González, 2005, p.55), a través de la extorsión, el secuestro y las contribuciones forzadas sobre la producción, particularmente de la coca, en las regiones sometidas a su influencia.

c) Segunda fase de expansión de 1983-1990

Tras el fracaso de la “tregua” y de las primeras negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), las Farc entran a privilegiar su fortalecimiento de tipo militar, que parece relegar a un segundo plano las motivaciones ideológicas de sus orígenes. Ello coincide con la muerte de su principal ideólogo, Jacobo Arenas, de extracción obrera y formado en el partido comunista y el papel protagónico en el desarrollo del movimiento que comienzan a jugar los mandos militares más jóvenes, forjada en la “guerra” y con escasa estructuración intelectual y política.

La expansión territorial de las FARC durante esta fase, marca la extensión del movimiento armado a nuevas regiones, más ricas y cercanas a los grandes centros urbanos, “es decir, más allá de las tradicionales zonas de frontera y colonización” (p. 56).

El fortalecimiento militar y la expansión territorial son posibilitados por el reforzamiento de los vínculos de las FARC con el negocio del narcotráfico, en el cual no solamente asumen el papel de protectoras de los cultivos ilícitos y cobradoras de contribuciones forzosas (“impuesto de gramaje”), sino que cada vez más se involucran directamente en la producción de la droga a través de “laboratorios” pertenecientes a la organización armada.

El “desdibujamiento” del ideario reivindicativo de sus comienzos se hace todavía mayor cuando la expansión territorial conduce a las Farc a confrontarse con los grupos paramilitares en las zonas controladas por estos o en aquellas regiones donde estos últimos pretenden expulsar a la guerrilla. Las masacres de poblaciones afectas al paramilitarismo y su secuela de expulsión de población campesina, son un recurso de las Farc cada vez más frecuente y con los mismos rasgos de inhumanidad que caracteriza a sus oponentes armados.

d) De la guerra de posiciones a la contención militar (1990 a la fecha)

De 1990 hasta el ascenso del actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el poder militar creciente de las Farc, les había permitido dar los primeros pasos hacia su ideal de alcanzar una “guerra de posiciones”, manifestado en sucesivas derrotas propinadas a la fuerza pública y el copamiento de esta, haciéndola incapaz de atender adecuadamente a la seguridad de las carreteras, las torres de conducción de electricidad y los oleoductos. Los llamados “retenes” efectuados por las Farc en autopistas principales del país y el secuestro de personas supuestamente adineradas para someterlas a los procesos de extorsión y negociación de su libertad; los atentados a torres de conducción, que dejaban sin energía a poblaciones enteras durante varias semanas; lo mismo que la voladura de oleoductos, que

paralizaban el suministro de petróleo de exportación, se intensifican a lo largo del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).

Pero ese crecimiento del poder militar de las Farc, encerraba por lo menos dos contradicciones fundamentales:

1. Se trataba de un poder sin opción de ser un poder político. “El desarrollo del aparato militar de las Farc en la década de los noventa no logró traducirse en avances de la capacidad de propuestas políticas, ni en la consecución del apoyo de amplios sectores urbanos del país a la lucha revolucionaria” (González, 2005, p. 57). Por el contrario, los excesos de violencia y la caída en actos de terrorismo les enajenó cualquier tipo de simpatía que en el pasado pudieron tener. La sensación generalizada de inseguridad que se apoderó de buena parte de la ciudadanía, al percibirse “encerrada” en las ciudades, sin posibilidad de poderse desplazar libremente por el territorio nacional, fue creando las condiciones para que un candidato como Álvaro Uribe Vélez, con un discurso de confrontación y de solución militar al conflicto interno, recogiera un apoyo ciudadano sin precedentes en la historia nacional.

De otra parte, “el poder de facto de las FARC [no exento de coacción] en muchas regiones rurales, no logró transformarse en opción de poder para importantes sectores urbanos de la sociedad colombiana”... Eduardo Pizarro anota como pueden existir condiciones para la consolidación de un poder insurgente, sin que ellas necesariamente se transformen en un factor de poder político, como ha ocurrido en el caso colombiano (Pizarro, 1996, p. 15).

2. Las contradicciones entre los intereses de las Farx y los de sus bases sociales: Para las Farc las zonas de frontera y de colonización son parte

de su estrategia para enfrentar al Estado Colombiano. Por el contrario, “los campesinos y colonos de estas regiones sólo buscan su incorporación al mercado y al Estado Nacional”. Para ellos la guerrilla ha dejado de ser el poder que les defiende frente a las arremetidas del latifundio y hasta cierto punto se convierten en obstáculo para la inversión pública y privada en sus regiones. En las nuevas zonas de influencia de las Farc, anteriormente ricas y productivas, el crecimiento económico simplemente se ha detenido. Así la empatía que existía entre este actor armado y los sectores sociales en sus zonas de influencia, se ha tornado, cada vez más, en un apoyo forzado por el poder de las armas.

1.1.1.2 Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El ELN constituye otro de los agentes armados del conflicto colombiano.

A diferencia de las Farc, que hunde sus raíces en el período de la violencia anterior de la década del cincuenta del siglo pasado, este grupo guerrillero debe su nacimiento a un proyecto claramente insurreccional de sectores de la intelectualidad revolucionaria urbana, influidos por el triunfo de la Revolución Cubana y que quisieron poner en práctica la teoría “Foquista” del Che Guevara. Por oposición a las Farc, que para la época en que surge el ELN, se encontraban sometidas a la dirección de un partido comunista urbano y por tanto sujetas a las coyunturas políticas nacionales dentro de las cuales juega dicho partido, este nuevo grupo armado reivindicaba la dirección política de la guerra desde el campo, es decir, desde el teatro mismo de las acciones militares y en la perspectiva de hacerlas llegar a tarde o temprano a las ciudades. Al halo romántico del período, unieron el hecho de contar en sus filas con sacerdotes católicos como Camilo Torres Restrepo –descendiente de una

prestigiosa familia bogotana y fundador de la primera facultad de sociología en el país en la Universidad Nacional –y los españoles Domingo Laín y Manuel Pérez, el último de los cuales llegaría a ser el comandante máximo de la agrupación durante muchos años hasta su muerte a mediados de la década de los noventa.

Para 1976, el núcleo central del ELN es aniquilado en una operación militar en Anorí, nordeste antioqueño. Los restos de la organización se retiran entonces hacia el departamento de Arauca, en el cual se iniciaba la explotación de nuevos yacimientos petrolíferos que venían a sustituir los primeros y agotados campos de producción del crudo que se remontaban a la década de los veinte del siglo pasado.

La extorsión a las compañías petroleras extranjeras y a las administraciones locales de la región fortalecidas con las regalías de la explotación del hidrocarburo, permitieron la obtención de cuantiosos recursos que sirven a la nueva expansión del grupo guerrillero a varias regiones del país (sur del departamento de Bolívar, norte y centro del Valle y el eje Cafetero).

Durante los años posteriores, el desarrollo de esta organización armada ha alternado acciones audaces –como la retención y posterior liberación de destacadas familias del Valle a las afueras de su capital, la ciudad de Cali, y el secuestro de aviones de pasajeros en vuelos internos–; sucesivos procesos de paz frustrados con los distintos gobiernos; desmovilización y reincorporación a la vida civil de muchos de sus militantes– como la llamada “corriente de renovación socialista” y otras fracciones menores–; confrontaciones con las Farc por el control territorial y con las fuerzas paramilitares, que lograron aniquilar muchos de sus frentes en el norte del departamento de Antioquia y en el sur del de Bolívar a finales de los noventa.

Para muchos analistas, el ELN es hoy un grupo muy debilitado militarmente y cuyo discurso nacionalista de la década de los sesenta ya no ofrece atractivo alguno. Con todo, sigue haciendo presencia en algunas zonas del país, recurriendo al chantaje y al secuestro para financiarse. El tipo de accionar que durante décadas caracterizó a esta organización y que para ella ofrecía un alto contenido simbólico, la voladura de oleoductos, ha dejado de producirse tal vez por un más férreo y eficaz control de la fuerza pública sobre toda la red de oleoductos que atraviesan el territorio nacional.

1.1.1.3 Paramilitarismo

Sin duda el más sanguinario y brutal de los agentes del conflicto interno colombiano.

Sobre el fenómeno paramilitar en Colombia, los distintos enfoques y análisis se agrupan en dos posiciones: quienes los consideran un producto de una política terrorista del Estado para enfrentar a las guerrillas de izquierda. Para otros, se trataría de una respuesta relativamente espontánea de sectores del agro, que incluiría a grandes propietarios de tierras y a sectores pobres, del campesinado, fatigados por las extorsiones y acciones violentas de aquellas. Una “especie de ganomalismo armado”, que “expresaría cierta dislocación del Estado”, sustentada en el alegato de esos sectores acerca de la incapacidad del Estado para defenderlos y garantizar su seguridad (González, 2005.p.59 y ss)

“... analistas vinculados a algunas organizaciones no gubernamentales consideran que el desarrollo de los grupos paramilitares obedece a una política de Estado, que hace parte de lo que esas organizaciones denominan en conjunto como “terrorismo de Estado”. Según ellas el paramilitarismo constituye una política de Estado en la medida en que cuenta con el apoyo y aquiescencia de las fuerzas

armadas a su proyecto. Pero de esta política no solo hacen parte los militares, sino también serían responsables de ella los poderes ejecutivo y judicial. El poder judicial, al situar las acciones y la investigación sobre los hechos perpetrados por los militares en un plano secundario, que conduce a reforzar los mecanismos de impunidad. Más aún, las políticas criminales y los procedimientos investigativos son proclives a favorecer la impunidad frente a los militares y civiles implicados en el paramilitarismo”(p.59).

Por el contrario, para la otra posición, el Estado colombiano sería una suerte de “víctima del fuego cruzado entre la insurgencia armada de izquierda y esos grupos de extrema derecha”(p. 60). Esta situación ha conducido a que el Estado sea cada día más cuestionado en su papel de titular legítimo del monopolio de la violencia y en consecuencia, a una pérdida creciente de su legitimidad en las zonas sometidas al conflicto.

Sin embargo, como lo señala otro investigador, Fernando Cubides (1998), el fenómeno paramilitar debe verse como “un proyecto político, social y económico con alcances nacionales”, pero asentado en realidades regionales diversas. »Los paramilitares se constituyen, en cuanto actores de la violencia a escala nacional, en “irregulares del Estado... y simultáneamente, en una modalidad de dominación regional por medio del gamonalismo armado” (Cubides, Olaya, Ortiz, 1998, p. 202, citado por González, p. 60)

El primer aspecto, esto es, el proyecto de alcance nacional que comporta el paramilitarismo, lo explica así Cubides:

Como lo muestra la literatura que existe sobre el tema, [el paramilitarismo] alcanza a todos aquellos grupos que se proponen suplir las funciones estatales, apuntalar un orden social amenazado, y actuar en forma paralela a las instituciones vi-

gentes contra quienes las atacan, así sea infringiendo la propia legalidad que dicen defender.

En términos políticos son “una extrema derecha armada y para institucional”. Y en cuanto a su expresión regional, son el resultado de una alianza de intereses entre élites locales, hacendados y narcotraficantes y algunas esferas e instituciones del Estado colombiano, principalmente sus fuerzas armadas, en los niveles regional y local (p. 60).

Esta compleja red de alianzas en las cuales se ha soportado y han servido al desarrollo del paramilitarismo, puede presentarse esquemáticamente así:

- a) El interés de las fuerzas armadas al prestar apoyo al paramilitarismo mediante la entrega de armas e información, e incluso la participación en acciones conjuntas, se centraría en poder realizar operativos de represión contra la población civil que se juzga favorable a la guerrilla, quitándole a ésta sus bases de apoyo. “Sobre este aspecto resulta pertinente citar a Carl Schmitt en su “teoría del Partisano”:

En este ciclo infernal de terror y las medidas antiterroristas, frecuentemente la caza del partisano se convierte en una imagen especial de la lucha partisana misma, y reafirma la justeza de aquella antigua sentencia, recordada frecuentemente, de una orden de Napoleón al general Lefevre del 12 de septiembre de 1813, que manda que donde hay partisanos se actúa como partisanos(González, 2005, p. 61).

En otras palabras, el paramilitarismo realizaría el “trabajo sucio” que la fuerza pública, limitada por un orden jurídico democrático y por controles institucionales como la procuraduría y la fiscalía, le impiden.

- b) Sectores de las élites políticas locales, se vincularon a la alianza con los paramilitares como una forma de mantener su hegemonía a nivel regional o de recuperarla en aquellos sitios donde la habían perdido a manos de grupos de oposición o de movimientos cívicos populares y campesinos⁸. Este objetivo se lograba mediante la eliminación física, la desaparición o el desplazamiento forzado de los dirigentes populares y de sus bases sociales. Este contexto explica la eliminación física de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, organización política creada por las Farc durante las conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancurt (1982-86) para facilitar su tránsito hacia la civilidad y a la lucha política legal.
- c) Otro sector interesado en favorecer el paramilitarismo han sido las organizaciones del narcotráfico, inicialmente para suprimir las contribuciones forzosas impuestas por la guerrilla de las Farc a la producción de drogas ilícitas en las regiones bajo su control y más tarde, para ganar nuevos territorios para los cultivos del alcaloide, arrebatándoselos a los grupos insurgentes.

Así mismo, han tenido interés en la conformación y desarrollo del paramilitarismo algunos sectores agroindustriales -como el del banano en el Urabá antioqueño- o incluso manufactureros, como se ha denunciado internacionalmente con el caso de la multinacional Coca-Cola. Para estos sectores, puede resultar funcional la existencia de grupos paramilitares como mecanismo violento de

resolución de conflictos laborales. Esta relación se estrecha particularmente en períodos de presentación de pliegos sindicales y negociación contractual⁹.

- d) Por último, muchos latifundistas, hacendados y narcohacendados¹⁰ han manifestado, de manera reiterada, su apoyo a los paramilitares... como único mecanismo para superar los problemas de seguridad en el campo, ante la incapacidad del Estado de mantener el “orden público” y así hacer viables las tendencias nacía una contrarreforma agraria y la ganaderización del agro colombiano. Esta tendencia es corroborada por Jesús A. Bejarano, quien señala que “en algunas de las zonas donde los paramilitares han recuperado territorio con respecto a la guerrilla, hay síntomas muy claros de recuperación del precio de la tierra” (González, 2005, p. 61) y de concentración de su propiedad. Todo indica que después de más de veinte años de terror por cuenta de los grupos paramilitares, de desplazamientos forzados con su secuela de abandono de la tierra o de ventas de esta a menosprecio por parte de los campesinos, se ha entrado en un nuevo período -a los tres o cuatro que ha conocido Colombia- de mayor concentración de propiedad agraria¹¹.

Desde el inicio del actual gobierno, presidido por Álvaro Uribe Vélez -reelegido para un nuevo mandato de cuatro años el último 28 de mayo-, se inició un proceso de negociación que ha conducido a la desmovilización, supuestamente de la mayoría de los grupos paramilitares, que no ha

8 Este fue el caso de algunos municipios del oriente de Antioquia, donde la Unión Patriótica desplazó a la vieja dirigencia política. O en el Urabá Antioqueño donde la influencia política corría a cargo del sindicato bananero sintainagro.

9 Recuérdese que Colombia ostenta también la tasa más alta de homicidios de dirigentes sindicales en el hemisferio occidental.

10 Sectores del narcotráfico que han invertido las cuantiosas ganancias del negocio en la adquisición de tierras, particularmente en la Costa Atlántica y en el Magdalena medio.

11 Algunos estudios hablan de la concentración de más de 4 millones de hectáreas en poder del Narcotráfico a comienzos del año 2000.

dejado de despertar con todo, numerosas inquietudes tanto en Colombia como en la comunidad internacional relativas a varios aspectos de dicho proceso, a saber:

- 1) Cuántas armas efectivamente se han entregado y si estas corresponde a los casi treinta mil desmovilizados producidos hasta ahora.
- 2) La continuidad o no, de las estructuras de poder local construidas durante los años de existencia de estos grupos. Ese poder no sólo tiene que ver con la influencia sobre la población civil gracias a las estrategias de intimidación y terror a la que aquella ha estado sometida, sino al control de las administraciones territoriales y a sus actividades (contratación pública, impuestos a los juegos de azar, sistema de salud para las poblaciones más pobres, etc);
- 3) La impunidad que parece extenderse para gran parte de los jefes del paramilitarismo por actos de graves violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad o la imposición de sanciones penales irrisorias por tales hechos.
- 4) El carácter incierto de la reparación a las víctimas de los actos violentos cometidos por el paramilitarismo, lo mismo que sobre la devolución a sus legítimos dueños o a sus herederos, de todos los bienes que les fueron arrebatados violentamente por los grupos paramilitares.
- 5) La posible impunidad que igualmente cubriría a todos cuantos, desde el Estado, las agremiaciones de ganaderos y terratenientes y las élites políticas locales, estimularon, financiaron y encubrieron el accionar paramilitar a lo largo de estos años.

CONCLUSIONES

La continuidad histórica de la violencia en Colombia, la sucesión de sus etapas, en la cual una etapa retroalimenta a la siguiente, permiten pensar solidamente que el fenómeno obedece a causas estructurales que subyacen a los proyectos colectivos forjados por los actores y agentes de la violencia.

El carácter estructural de ésta, de otra parte, repudiaría las soluciones simplificadoras como la del diálogo y la negociación para procurar la dejación de las armas o la vía militar para lograr la derrota de la insurgencia.

La experiencia histórica demostraría, por el contrario, que el no abordaje de las condiciones estructurales, bajo cualquiera de las opciones de solución que se escojan, no conduciría sino a la apertura de una nueva fase de violencia, tal como ocurrió en el pasado.

Estas condiciones estructurales y sobre las cuales no es posible detenerse en estas conclusiones, tienen que ser por lo menos con tres tipos de problemas: la no resolución del problema agrario de concentración creciente de la propiedad en el campo; la no inclusión de más del 60% de la población colombiana en una sociedad moderna en términos de acceso a los servicios públicos esenciales, a la salud y a la educación y finalmente, la escasa representatividad del régimen político colombiano expresada en los altos índices de abstención electoral.

Corresponde, por tanto, a la sociedad en general y a la sociología jurídica en el área del saber que le es propio, apoyada en su actividad investigativa, mantenerse alerta para orientar la búsqueda de una paz viable y duradera como la que Colombia anhela desde hace tanto tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

Comisión de estudio sobre la violencia. (1987). *Colombia y democracia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Contreras, J. (2002). *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*. Editorial Oveja Negra.

Cubides, F., Olaya A. C. & Ortiz, C. (1998). *La violencia y el municipio colombiano*. Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

González, F. (2005). *Violencia y política en Colombia*. Bogotá: CINEP.

Guillén, F. (1979). *El Poder político en Colombia*. Bogotá: Ed. Planeta.

Molano, A. (1994). *Trochas y Fusiles*. Bogotá: El Ancora Editores.

O' Quist, P. (1978). *Violencia, política y conflicto en Colombia*. Bogotá: Biblioteca del Banco Popular.

Pecaut, D. (1987). *Orden y violencia en Colombia*. Bogotá: El siglo XXI.

Pecaut, D. (2000). Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia. Francisco Leal Buitrago (Ed.). *Los Laberintos de la guerra: utopías e incertidumbres sobre la paz*. Bogotá: Cinep.

Pizarro, E. (1996). *Insurgencia sin violencia. La guerrilla Colombiana en una perspectiva comparada*. Universidad Nacional. Bogotá: IEPRI.

Pizarro, E. (1991). *Las Farc, de la autodefensa a todas las formas de lucha*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

Torres, C. (1979). *La violencia y los cambios socioculturales en los cerros rurales Colombianos*. Bogotá: Asociación Colombiana de sociología.